



## Editorial

# La crisis sanitaria en la sanidad pública: una llamada urgente a la acción

Isabel María Paúles Cuesta<sup>a,\*</sup>, Jonatan Alonso Morte<sup>b</sup>, Laura Cardona Monzón<sup>c</sup>,  
 María Asunción Gracia Aznar<sup>d</sup>, Paola Martínez Ibáñez<sup>e</sup>, Cristina Ruiz Morollón<sup>f</sup>

<sup>a</sup>Centro de Salud Amando Loriga. Caspe (Zaragoza). <sup>b</sup>Centro de Salud de María de Huerva (Zaragoza). <sup>c</sup>Centro de Salud de Tauste (Zaragoza). <sup>d</sup>Centro de Salud Delicias Norte. Zaragoza. <sup>e</sup>Centro de Salud Fuentes Norte. Zaragoza. <sup>f</sup>Centro de Salud de Híjar (Zaragoza). Grupo de Trabajo de Estilos de Vida y Determinantes de Salud de la SEMG.

La crisis sanitaria que azota la sanidad pública no es un fenómeno aislado ni algo pasajero. Es el resultado de años de desinversión, sobrecarga del sistema y una creciente desigualdad en el acceso a los servicios médicos. En muchos países, el sistema de salud pública, que históricamente ha sido el pilar que asegura la atención médica para los sectores más vulnerables, está al borde del colapso. La pandemia de la COVID-19 dejó al descubierto las debilidades estructurales que ya existían; sin embargo, a medida que los años pasan, la situación se ha ido deteriorando aún más y las consecuencias son cada vez más visibles para la ciudadanía.

Uno de los principales problemas que enfrenta la sanidad pública en la actualidad es la falta de personal sanitario. La escasez de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud ha alcanzado niveles críticos. Las jornadas laborales interminables, el estrés constante y las condiciones laborales precarias han provocado una ola de agotamiento y abandono de los puestos de trabajo. La sobrecarga de trabajo, sumada a la escasa remuneración en comparación con la carga de responsabilidad que recae sobre los profesionales, ha llevado a muchos a dejar el sistema público en busca de mejores condiciones laborales. Quienes permanecen, lo hacen bajo una presión insoportable, que tiene consecuencias tanto para su salud como para la calidad de atención que pueden ofrecer.

La infraestructura del sistema público también está en crisis. Muchos hospitales y centros de salud carecen de recursos básicos: desde equipos médicos hasta suministros

esenciales. La falta de inversión en infraestructuras se traduce en la obsolescencia de los equipos y en la insuficiencia de espacios adecuados para atender la creciente demanda de servicios. En algunos lugares, las listas de espera se alargan indefinidamente, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos que podrían salvar vidas o, cuando menos, propiciar la más elemental calidad de vida. Esta demora, además, genera un ciclo de frustración y desconfianza en un sistema que debería ser un modelo de justicia social.

El otro factor crucial que agudiza la crisis de la sanidad pública es la creciente desigualdad en el acceso a la atención médica. A pesar de que la sanidad pública debería ser un derecho universal, las disparidades en la calidad de la atención siguen siendo un asunto pendiente. Las zonas rurales, las poblaciones marginadas y los sectores más vulnerables son los más afectados por la falta de recursos. En estos lugares, los hospitales y los centros de salud suelen estar sobrecargados, mal equipados y, en muchos casos, sin personal suficiente. El acceso a los servicios de salud se convierte en un lujo inaccesible para quienes más lo necesitan.

La privatización de los servicios de salud es otra de las amenazas que se cierne sobre la sanidad pública. A medida que los gobiernos priorizan la reducción de costes, el sector privado se convierte en una opción atractiva, a pesar de que esta tendencia pone en peligro la equidad en la atención. Si el sistema público sigue financiándose con precariedad, el modelo de atención se desplazará hacia uno basado en el beneficio económico, lo que obviará los principios fundamentales de

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [impaules@salud.aragon.es](mailto:impaules@salud.aragon.es) (I.M. Paúles Cuesta).  
<http://dx.doi.org/10.24038/mgyf.2025.036>

solidaridad y justicia social. En este contexto, los pacientes que no puedan permitirse servicios privados se verán aún más marginados.

Enfrentar esta crisis requiere decisiones valientes y un compromiso claro por parte de las autoridades y la sociedad. Es urgente que se aumenten las inversiones en la sanidad pública, no solo para mejorar las infraestructuras y los equipamientos, sino también para garantizar una remuneración digna y unas condiciones laborales adecuadas para los profesionales de la salud. La formación continua y el fortalecimiento de la red sanitaria son igualmente fundamentales. Además, debe haber un esfuerzo concertado para garantizar que los más desfavorecidos puedan acceder a la atención médica sin barreras económicas ni geográficas.

El modelo de sanidad pública universal no debe ser una opción negociable, sino una prioridad para cualquier gobierno que aspire a ser justo y equitativo. La crisis sanitaria que atraviesa el sistema público es un reflejo de la falta de visión política a largo plazo y de compromiso social. No podemos permitirnos que la sanidad pública sea solo una sombra de lo que fue, ni mucho menos un privilegio de unos pocos. La salud es un derecho, no un negocio, y debe ser tratado como tal. Solo con un sistema público sólido y bien financiado podremos asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su clase social o lugar de residencia, tengan acceso a la atención médica que merecen. La situación exige una respuesta inmediata, pues la salud de las futuras generaciones no puede quedar en manos de la inacción y del olvido.